

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL
Medellín, tres (03) de mayo de dos mil veintiuno (2021)

DEMANDANTE	: GLORIA MARCELA BURITICA ORREGO
DEMANDADO :	: COLPENSIONES, PORVENIR S.A
TIPO DE PROCESO	: ORDINARIO
RADICADO NACIONAL	: 05-001-31-05-020-2018-00569-01
RADICADO INTERNO	: 069-21
DECISIÓN	: ADICIONA Y CONFIRMA
ACTA NÚMERO	: 116

En la fecha, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL, procede a emitir sentencia de segunda instancia en la que se estudia los recursos de apelación, en el proceso de la referencia. La Sala, previa deliberación, adoptó el proyecto presentado por el ponente, Doctor HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ, que a continuación se traduce en la siguiente decisión:

De conformidad con el **Decreto 806 de 2020**: “Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica”, artículo 15, la sentencia se profiere escrita.

ANTECEDENTES

La parte demandante solicita se DECLARE la ineficacia del traslado realizado del RPM al RAIS y que por lo tanto siempre permaneció sin solución de continuidad en el RPM, y que por lo tanto se ordene a las AFP demandadas para que realicen los tramites a que haya lugar a activar la afiliación de la demandante en Colpensiones y que sea esta entidad quien realice el proceso de validación del traslado de las cotizaciones y ordenar a PORVENIR S.A que realice la devolución de todos los aportes cotizados con sus rendimientos, con el bono pensional, cuotas de administración a Colpensiones.

Como supuestos facticos manifestó que nació el 03 de marzo de 1959, y se afilió al ISS a partir del 21 de junio de 1988, y que en el año 1996 cuando trabajaba en la Vidriera Antioqueña fue abordada por un asesor de Horizonte y se le informó que en dicha entidad obtendría una pensión mejor que en el ISS y que además dicha entidad se iba a acabar. Que el 01 de febrero de 1996 se traslada al RAIS pero que al momento del traslado no se le brindó la debida información ni se le indicó acerca de las consecuencias de dicho traslado. Que el 02 de mayo de 2018 a través de apoderado solicitó a la AFP se le informara sobre el monto de la pensión en ambos regímenes, y que además Colpensiones se niega a autorizarle el traslado a dicho régimen.

SENTENCIA PRIMERA INSTANCIA

En sentencia del 11 de noviembre de 2020, el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín, DECLARÓ la INEFICACIA de la afiliación o traslado efectuada por la demandante GLORIA MARCELA DEL SOCORRO BURITICÁ ORREGO cuando suscribió el documento de afiliación o traslado del RPMPD al RAIS a través de la AFP PORVENIR S.A en el año 1996 y en consecuencia DECLARÓ que estuvo válidamente afiliada y sin solución de continuidad en el RPMPD que administra actualmente COLPENSIONES. ORDENO a la AFP PORVENIR S.A que en un término no mayor a 30 días, luego de la ejecutoria de la sentencia, procediera a trasladar la totalidad de la cuenta de ahorro individual que posee la demandante, así como todos los dineros recibidos con ocasión de su permanencia en dicho régimen, como gasto de administración, seguros previsionales, aportes al fondo de garantía de pensión mínima, sin efectuar descuento alguno de los aportes recibidos por la actora, dineros que deberán girar a COLPENSIONES a quien a su vez ORDENO recibir la totalidad de los aportes que posee la demandante, y que provienen de la AFP PORVENIR S.A junto con los rendimientos financieros; a reactivar su afiliación al RPMPD, convalidar dichos aportes en semanas que se vean reflejadas en la historia laboral de la demandante. CONDENÓ EN COSTAS a PORVENIR S.A y fijó como agencias en derecho la suma de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes en favor de la parte demandante.

IMPUGNACIÓN

El apoderado de Colpensiones interpone recurso de apelación manifestando que la demandante no solicitó el traslado antes de que le faltaran menos de 10 años para pensionarse por lo que es imposible el traslado. Que además por ser un contrato Inter partes, la demandante también tiene obligaciones conforme al decreto 2550 de 2010 donde se determinan las obligaciones que debe atender el afiliado que pertenezca al sistema general de pensiones como: 1. Informarse de las condiciones del sistema aprovechando los mecanismos de divulgación, 2. Revisar las condiciones de la afiliación o traslado, 3. La afiliación implica la aceptación de los efectos legales costros y restricciones derivadas de esta.

El apoderado de Porvenir S.A interpone recurso de apelación solicitando la revocatoria de la sentencia que declaró la ineficacia y en su lugar no se ordene a la entidad a trasladar los gastos de administración por haber sido trasladados a terceros de buena fe como las aseguradoras y estas fueron necesarias por la excelente administración de los recursos. Que al momento de realizarse el traslado de la demandante la normativa existente con respecto al deber de información no abarcaba tantos conceptos como si lo es ahora el deber del buen consejo pues para dicha época solo era suficiente con una asesoría verbal según el artículo 97 del Decreto 663 de 1993, teniendo en cuenta además la manifestación de voluntad en la firma del formulario que cumplía con los requisitos exigidos por la superintendencia financiera, y que en razón de ello se le dio la información clara y veras para el traslado. Que la demandante dijo en el interrogatorio que el motivo de su traslado era el monto de su mesada pensional y que esto según la sentencia SL 1452 en el salvamento de voto se consagra como un móvil o motivo no válido para la ineficacia. Que además también indicó que fue asesorada de

manera grupal y posteriormente de manera individual, que no leyó lo que firmo y que esto habla mucho del deber de diligencia y cuidado de la parte demandante y que solo se percató de dicho inconveniente cuando cumplió los 50 años.

Además de lo anterior el apoderado pregunta si el deber de información es una obligación de medio o de resultado, pues indica que en el interrogatorio de parte se advierte que la demandante omitió su deber de diligencia y cuidado.

Que además el soporte documental para esta afiliación es el formulario de afiliación y que para la fecha del traslado no existía obligación legal de guardar información documental sobre la información brindada por lo que no se puede obligar al fondo a lo imposible y traer soportes documentales que no eran obligatorios para la fecha.

Que la obligación del buen consejo y de asesoría son obligaciones posteriores surgidas a partir del año 2010 y 2014 según quedo anotado en las sentencias de la CSJ SL 1688 y SL1689 de 2019 junto con la 2464 de 2019, y que por lo tanto dichas obligaciones no se pueden aplicar de manera retroactiva.

Que otro aspecto importante son los actos de relacionamiento, según la sentencia SL 413 de 2018 sobre los traslados horizontales que realizó la parte demandante que denotan la intención de permanecer en el RAIS y que ello no convalida ni subsana pero si es un indicio de que la demandante quería pertenecer al RAIS y que dicho fondo tiene la obligación recibir todas las solicitudes por parte de cualquier posible afiliado que quiera hacer parte del RAIS y que ello es diferente al concepto de la CSJ sobre el tema de desincentivar la afiliación.

Que además no es posible visualizar perjuicios de la decisión del traslado debido a que la demandante recibió la debida asesoría y ante tales supuestos el afiliado debe someterse a las condiciones del sistema por el que optó y puede verse beneficiado o perjudicado en funciones de factores como la fluctuación en el mercado de trabajo, la devolución de sus salarios y otras variables que le pueden acarrear mayores o menores réditos respecto a las prestaciones que hubiere podido conseguir en uno u otro régimen.

Que además el incumplimiento de la parte accionada en el deber de diligencia y cuidado en sus propios negocios conlleva a que la misma no pueda ser beneficiaria de su propia culpa o negligencia en su actuar lo que esta corroborado con el accionar sistemático de la demandante pues esta en el interrogatorio de parte manifestó no haber realizado comparaciones con otros fondos pensionales, no haber hecho preguntas o indagaciones al momento de suscribir el formulario y no hacer uso de los diferentes canales de atención que tiene la demandada.

Por todo lo anterior solicita se revoque la sentencia y en caso de que se confirme la ineficacia solicita no se ordene le traslado de los gastos de administración al haber sido trasladados a terceros de buena fe.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

El apoderado de Colpensiones presenta alegatos de conclusión reiterando los argumentos ya expuestos en el recurso de apelación indicando además en caso de que no sean tenidas en cuenta dichas apreciaciones deberá confirmarse la sentencia en el sentido que en esta se ordenó a la AFP privada trasladar todos los recursos que posee el actor en su cuenta de ahorro individual, esto es, además de los aportes, los rendimientos de la cuenta individual, las cuotas de administración, la garantía de pensión mínima, valores de reaseguros o seguros provisionales, además de los rendimientos financieros con todos sus frutos e intereses debidamente indexados, lo anterior conforme al principio de la estabilidad financiera consagrado en el artículo 334 de la Constitución Política Colombiana, el cual fue modificado por el artículo 1° del Acto Legislativo 003 de 2011, pues los referidos dineros se han causado como resultado del trabajo de la demandante, por lo que, los mismos deben ser asumidos por el fondo privado con cargo a sus propios recursos.

Que, respecto a la absolución de la condena en costas, la misma es procedente en ambas instancias, teniendo en cuenta que COLPENSIONES es un tercero de buena fe que fue citado al proceso precisamente en calidad de administradora de los recursos del Régimen de prima media con prestación definida, sin que nada haya tenido que ver en el acto de traslado celebrado entre las partes y que fue declarado ineficaz. Que además, debe tenerse en cuenta que COLPENSIONES en ejercicio del derecho constitucional a la defensa no le queda otra alternativa que oponerse a unos hechos y unas pretensiones que no le constan y de los cuales no hizo parte, debiendo esperarse que los supuestos fácticos sean demostrados en el transcurso de un proceso y que sea el Juez con sus facultades de impartir justicia quien defina si existió o no una vulneración de derecho a la demandante, resultando injusta entonces la condena por este concepto.

La parte demandante presenta alegatos de conclusión manifestando que reitera los argumentos expuestos en primera instancia citando para ello providencias de la CSJ como apoyo al deber de información que le asiste a las AFP y sobre la cual afirma no se le brindó a la demandante.

La apoderada de Porvenir reiterando algunos de los argumentos expuestos en la apelación señala con respecto a la ineficacia del traslado que no existían razones fácticas o jurídicas para declarar la ineficacia del traslado al Régimen de Prima Media con Ahorro Individual, pues la decisión de la parte actora se realizó de forma espontánea, sin presiones o apremios de alguna naturaleza y cumpliendo los requisitos exigidos en la ley.

Que la obligación del buen consejo, la doble asesoría, e incluso la de desincentivar la afiliación son obligaciones posteriores, surgidas a partir del año 2010 y 2014, lo anterior fue recapitulado y objeto de pronunciamiento en las sentencias de la Corte Suprema de Justicia SL SL1688-2019, CSJ SL1689-2019 y CSJ SL3464-2019 en consecuencia, tales obligaciones no existían para la época de la afiliación y mucho menos las mismas se pueden aplicar de manera retroactiva y que en caso de confirmarse la sentencia solicita no sea ordenado la devolución de los gastos de administración por las razones ya expuestas.

PRONUNCIAMIENTO JURÍDICO

El problema jurídico en esta instancia gira en determinar: i) Si hay lugar a declarar la ineficacia del traslado; ii) Si hay lugar a trasladar los gastos de administración y los seguros previsionales, y en consulta a favor de Colpensiones si dichas sumas deben ser devueltas de forma indexada.

Para el caso concreto no existe discusión y está acreditado en el plenario que la demandante nació el 03 de marzo de 1959, (página 29 del expediente digital), y que estuvo afiliada en el ISS desde el 21 de junio de 1988 a través del empleador M.C Ltda, (página 59 expediente digital), y se trasladó a la AFP Horizontes desde el 27 de febrero de 1996, (pagina 153), y a PORVENIR S.A desde el 19 de noviembre de 1999, (página 69 y 155).

Descendiendo al caso particular, se tiene que, en el INTERROGATORIO DE PARTE absuelto por la accionante, no se evidencia confesión alguna, pues esta indicó que al momento de la asesoría el traslado no le hablaron de los excedentes de libre disponibilidad, ni de la devolución de saldos, ni de la heredabilidad, ni de la garantía de pensión mínima, que se afilió a porvenir en el año 1999 cuando el fondo de pensiones se llamaba horizontes y la visito el de porvenir y le dijo que horizontes se iba a acabar y por eso se pasó a porvenir. Se afilió a horizontes hace mucho tiempo y las visitaron y les dijeron que se pasara porque se iba a acabar el ISS, y lo que lo que lo único que le podía pasar es que la pensión de dicho fondo fuera igual a la del ISS. Que esa asesoría fue muy corta, porque fue para muchas personas y ya después de la charla general se quedó una persona que en 15 minutos le ayudó a llenar el formulario. Que no le dijeron que se podía pensionar antes y que lo que recuerda que le dijeron es que se podía pensionar en las mismas condiciones del seguro. Que nunca después del traslado tuvo asesoría del fondo de pensiones y que ella solo se acercó al mismo a solicitar el traslado, pero se lo negaron porque le faltaba menos de 10 años para pensionarse.

Por lo anterior el problema jurídico se resolverá en el siguiente orden:

1. De la ineficacia del traslado

Se tiene que el derecho a la seguridad social es irrenunciable conforme el artículo 48 y 53 de la CP, por ello cualquier pretensión de cambio en las condiciones de este derecho pensional debe ser tomado de manera autónoma y consiente con una comprensión volitiva tal que no quede duda que la información entregada por la entidad para que, con la libertad e información, la persona pueda decidir si se cambia de régimen o no.

Visto lo anterior, debemos revisar que con base en el art. 13 literal b) de la Ley 100 de 1993 que habla de la característica de la seguridad social, y señala allí: *“La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1º del artículo 271 de la presente ley”,* y si nos remitimos al art 271 de la Ley 100 señala que **no será eficaz el traslado** si se menoscaba la libertad, la dignidad humana, los derechos de los trabajadores que son sujetos de protección, y dice que *“Cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho*

del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado...” no solo a la multa sino que dice en forma expresa “... La afiliación respectiva **quedará sin efecto** y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador.”, o sea que se refiere a una ineficacia.

Desde el **Decreto 720 de 1994**, por el cual se reglamenta el artículo 105 y parcialmente el artículo 287 de la Ley 100 de 1993, en el capítulo relativo a LA RESPONSABILIDAD DE LAS SOCIEDADES ADMINISTRADORAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES Y ORGANIZACIÓN DE LOS PROMOTORES, en sus artículos 10 y 12 respectivamente reza:

“RESPONSABILIDAD DE LOS PROMOTORES. Cualquier infracción, error u omisión en especial aquellos que **impliquen perjuicio a los intereses de los afiliados**- en que incurran los promotores de las sociedades administradoras del sistema general de pensiones en el desarrollo de su actividad **compromete la responsabilidad de la sociedad administradora ...**” (Resalto fuera del texto)

“OBLIGACIÓN DE LOS PROMOTORES. Los promotores que empleen las sociedades administradoras del sistema general de pensiones **deberán suministrar suficiente, amplia y oportuna información** a los posibles afiliados al momento de la promoción de la afiliación, durante toda la vinculación con ocasión de las prestaciones a las cuales tenga derecho el afiliado.” (Resalto fuera del texto)

Este deber profesional que existe desde 1994, ese de información que permita al usuario tomar una decisión libremente consentida, es decir, **la carga de la prueba correspondería a la entidad demandada**, y que en estos casos corresponde a que se demuestre: cuál fue la información que se le entregó y en qué vastedad se presentó. Tal conceptualización se encuentra en la sentencia SL 12.136-2014, Rad. 46.292 del 3 de Sept. de 2014, M. P. Dra. ELCY DEL PILAR CUELLO CALDERÓN, que reza:

“...A juicio de esta Sala no podría argüirse que existe una manifestación libre y voluntaria cuando las personas desconocen sobre la incidencia que aquella pueda tener frente a sus derechos pensionales, ni puede estimarse satisfecho tal requisito con una simple expresión genérica;....”.

Desde ahí ha existido una línea jurisprudencial, entre otras la de radicado 17.595 de 18 de octubre de 2017, en donde se dice, que la información tiene que ver con: 1º. La antesala de la afiliación hasta la determinación de las condiciones del disfrute pensional, 2º. El deber de información concreto y comprensible; y 3º. Que sea de manera prudente, y de manera más específica. Igualmente, la sentencia SL 19.447 de 2017 con radicado 47.125, que indicó que aún operaba la ineficacia del traslado si el afiliado no tiene régimen de transición.

El anterior criterio ha sido reiterado por la CSJ en sentencia SL1421, 1688 y 1689 de 2019, SL4426-2019, y de forma más reciente la sentencia SL 2611,

2877 y 4811 de 2020, y como juez constitucional en las sentencias STL 3716-2020, STL4001-2020 y STL4084-2020, en las cuales se manifestó que los fondos de pensiones son los obligados a dar una información clara, comprensible y suficiente sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea; y que la carga de la prueba sobre el deber de información corresponde a las AFP debiendo probar que dicha información fue realizada, con diligencia, cuidado y buena fe, sin que implique en momento alguno que la sola firma o diligenciamiento del formulario pueda entenderse verdadera información.

La anterior argumentación es aplicable a este caso, pues la entidad accionada PORVENIR S.A., no trajo al plenario ninguna prueba eficaz y relativa a la posible actividad de asesoramiento e información adecuada a la parte actora, cuando tomó la decisión de trasladarse de Colpensiones, sin que les hayan dado una información suficiente y cierta al no haberse demostrado que se le habló de las desventajas del RAIS, ni de los factores cambiantes que inciden al cuantificar la mesada pensional como son la rentabilidad, las cotizaciones y la edad probable de ellas y sus posibles beneficiarios al momento de pensionarse; tampoco sobre la deducción de los gastos de administración, ni de seguros previsionales; no le informaron de la modalidad pensional que debían escoger cuando se fueran a pensionar, ni de la pensión anticipada, ni de la fecha de redención del bono pensional, tampoco hay constancia de la información sobre el capital mínimo que tenía que tener, estando la carga de probar dicha información en cabeza de la accionada ya mencionada, siendo esta la razón por lo que se genera que se haya violentado el **derecho de libertad de selección** del régimen, además de la vulneración del derecho a la dignidad y a la seguridad social de la persona conforme el art 272 de la Ley 100 de 1993.

Al respecto debe señalarse que la afiliación inicial realizada por la parte actora, no tuvieron efectos, por no existir una libertad informada al momento del traslado o de la afiliación, conforme al artículo 271 de la Ley 100 de 1993, lo que implica que dichos actos son inoponibles, son imprescriptibles y no pueden ser convalidados bajo ningún aspecto, por lo menos hasta que se cumplan los requisitos para el disfrute pensional. Por ello no es suficiente que la sociedad PORVENIR S.A. aporte, historial de vinculaciones, certificado de afiliación, relación histórica de movimientos, historia laboral e historia laboral válida para bono, formulario de afiliación, y comunicados de prensa; lo que lleva a concluir que al momento de trasladarse de ISS al RAIS, **no les dieron una información completa y suficiente.**

Conforme a lo señalado, la sentencia de primera instancia deberá ser CONFIRMADA en lo que respecta a la declaración de la ineficacia del traslado; y confirmar la orden dada de trasladar a los aportes efectuados por el demandante, incluidos los frutos, rendimientos e intereses.

2. De los efectos de la ineficacia

Respecto a la devolución de la **cuotas o gastos de administración debidamente indexadas** hay lugar a ser trasladadas conforme lo establece la sentencia SL 1688 y 1689 de 2019, y teniendo en cuenta que : 1º) En la ineficacia las cosas deben volver al estado en que se encontraban, entendiendo que el aporte pensional debe devolverse completo, sin que pueda admitirse que por haberse generado rendimientos o pagos

posteriores a la cotización realizada no se debe tener en cuenta el aporte completo, pues las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la afiliación fallida y menos habrá de tenerse consideración alguna para la entidad que aprovechándose de la falta de información fue la que indujo a la afiliación inicial o al mencionado traslado al RAIS, por ello, las restituciones mutuas se dan por efectos de la nulidad del contrato y no de la ineficacia 2º) Porque debe tenerse en cuenta que dichos porcentajes ingresaron directamente a la AFP accionada durante en el tiempo en que estuvo afiliada la parte accionante en esta, en tanto que la cuota de manejo es administrada directamente por el fondo de pensiones; 3º) Porque la devolución de los gastos de administración es ordenada en la sentencia SL1421 de 2019 cuando señala, que la ineficacia genera que las cosas vuelven al estado en que se encontraban, y el Fondo de Pensiones debía devolver “los aportes por pensión, los rendimientos financieros y los gastos de administración al Instituto de Seguros Sociales”; y 4) Porque si bien es cierto que el art. 20 de la Ley 100 de 1993 determina el porcentaje que se destina a financiar los gastos de administración, no se puede pasar por alto que se está bajo la figura de la ineficacia, la cual deja sin efectos jurídicos las actuaciones realizadas, lo que genera que todo lo cotizado a la AFP deba trasladarse a Colpensiones, y aunado a lo anterior, es a esta última entidad a la que le corresponde determinar el porcentaje que va a destinar a dicho rubro, por ende la Administradoras Privadas no puede librarse de su devolución por estar consagrado en dicho artículo.

Suma que debe ser debidamente indexada al momento del pago conforme a la sentencia SL 1689 de 2019.

- **Las sumas adicionales de la aseguradora** hay lugar a devolverlas **debidamente indexada**, porque la CSJ SL17595-2017 y CSJSL4989-2018, donde se rememoró la CSJ SL, 8 sep. 2008, rad. 31989 se dijo: “*La administradora tiene el deber de devolver al sistema ..., sumas adicionales de la aseguradora,.*”.

En virtud de lo anterior se ADICIONARÁ la sentencia de primera instancia en el entendido de que las cuotas de administración y seguros previsionales que la demandada PORVENIR. S.A, deberá devolver a COLPENSIONES debe ser de forma indexada.

Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A Y COLPENSIONES en la suma de **\$908.526** para cada una de ellas por no haber salido avante los recursos de apelación interpuestos.

DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, la SALA SEGUNDA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia de primera instancia en el entendido de que las cuotas de administración y seguros previsionales que la demandada PORVENIR. S.A, deberá devolver a COLPENSIONES deben

Radicado Único Nacional 05-001-31-05-020-2018-00569-01
Radicado Interno 069-21

ser devueltos de forma indexada, según lo argumentado en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia emitida por el Juzgado Veinte Laboral del Circuito de Medellín.

TERCERO: Costas en esta instancia a cargo de PORVENIR S.A Y COLPENSIONES en la suma de **\$908.526** para cada una de ellas por no haber salido avante los recursos de apelación interpuestos.

Las anteriores decisiones se notifican en ESTADOS

Los Magistrados.



HUGO ALEXANDER BEDOYA DÍAZ



GUILLERMO CARDONA MARTINEZ



CARMEN HELENA CASTAÑO CARDONA

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
MEDELLÍN – SALA LABORAL - HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados N ° 079 del 10 de mayo de 2021

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100>